



Expediente Nº: E/05873/2015

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos ante D. **A.A.A.** en virtud de denuncia presentada por el **AYUNTAMIENTO DE SANT FRUITOS DE BAGES** y teniendo como base los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 8 de julio de 2015, tuvo entrada en esta Agencia escrito de la POLICÍA LOCAL DE SANT FRUITOS DE BAGES (BARCELONA), comunicando posible infracción a la Ley Orgánica 15/1999 motivada por la instalación de una cámara de videovigilancia en la (C/....1) de la localidad de *****LOCALIDAD.1(BARCELONA)**, cuyo titular es **D. A.A.A.**.

En su escrito de denuncia, la POLICIA LOCCAL pone de manifiesto la instalación de una cámara de videovigilancia en el portal sito en la (C/....1) enfocando a todas las personas que puedan pasar al rellano y a la escalera, sin autorización de los vecinos, sin carteles ni inscripción de fichero.

SEGUNDO: Tras la recepción de la denuncia la Subdirección General de Inspección de Datos procedió a la realización de actuaciones previas de investigación para el esclarecimiento de los hechos denunciados, teniendo conocimiento de los siguientes extremos:

1. En fecha 18 de septiembre de 2015 se solicita información al denunciado por los Servicios de Inspección de esta Agencia, respecto al sistema de videovigilancia denunciado, siendo devuelta la carta por el servicio de Correos con la indicación "Ausente reparto".
2. En fecha 20 de octubre de 2015 se reitera la solicitud de información al denunciado siendo devuelta la carta con la indicación de "Desconocido".
3. En fecha 3 de noviembre de 2015 se realiza solicitud de colaboración a la Policía Local de Sant Fruitos de Bages, para que realicen determinadas actuaciones oportunas encaminadas a determinar diversos aspectos del sistema de videovigilancia denunciado, elaborando informe al respecto de fecha 12 de noviembre de 2015 en el que se pone de manifiesto lo siguiente:
 - Que a fecha 10 de noviembre de 2015 se ha comprobado la existencia del sistema de videovigilancia instalado en dicho edificio, tal y como se puede observar en el reportaje fotográfico que se adjunta.
 - Que después de realizar las gestiones oportunas para proceder a la identificación del morador actual de la vivienda, esa Policía ha podido comprobar que el antiguo morador era el señor **A.A.A.**, que le consta una comunidad de bienes llamada **"XXXX, CB"**.
 - Que el señor **A.A.A.** ha llevado a cabo la venta del inmueble y que el actual propietario sería **"CAPULATELL PROMOCIONS, SOCIEDAD LIMITADA"**, domiciliada en *****LOCALIDAD.2 (***CP.1-LLEIDA,**

(C/....1).

- Se adjunta reportaje fotográfico en el que se puede observar que la cámara se encuentra situada a la entrada de la portería o edificio, siendo esta una zona ajena a la vivienda del denunciado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I

Es competente para resolver la Directora de la Agencia Española de Protección de Datos, conforme a lo establecido en el artículo 37.d) en relación con el artículo 36, ambos de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (en lo sucesivo LOPD).

II

Con carácter previo, procede situar la materia de videovigilancia en su contexto normativo.

Así, el artículo 1 de la LOPD dispone: *“La presente Ley Orgánica tiene por objeto garantizar y proteger, en lo que concierne al tratamiento de los datos personales, las libertades públicas y los derechos fundamentales de las personas físicas, y especialmente de su honor e intimidad personal y familiar”*.

En cuanto al ámbito de aplicación de la LOPD, el artículo 2.1 de la misma señala: *“La presente Ley Orgánica será de aplicación a los datos de carácter personal registrados en soporte físico que los haga susceptibles de tratamiento, y a toda modalidad de uso posterior de estos datos por los sectores público y privado”*, definiéndose el concepto de dato de carácter personal en el apartado a) del artículo 3 de la LOPD, como *“Cualquier información concerniente a personas físicas identificadas o identificables”*.

El artículo 3 de la LOPD define en su letra c) el tratamiento de datos como aquellas *“operaciones y procedimientos técnicos de carácter automatizado o no, que permitan la recogida, grabación, conservación, elaboración, modificación, bloqueo y cancelación, así como las cesiones de datos que resulten de comunicaciones, consultas, interconexiones y transferencias”*.

El artículo 5.1. f) del Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, aprobado por Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, define datos de carácter personal como: *“Cualquier información numérica, alfabética, gráfica, fotográfica, acústica o de cualquier otro tipo, concerniente a personas físicas identificadas o identificables”*.

En este mismo sentido se pronuncia el artículo 2.a) de la Directiva 95/46/CE del Parlamento y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la Protección de las Personas Físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, según el cual, a efectos de dicha Directiva, se entiende por dato personal *“toda información sobre una persona física identificada o identificable; se*

considerará identificable toda persona cuya identidad pueda determinarse, directa o indirectamente, en particular mediante un número de identificación o uno o varios elementos específicos, característicos de su identidad física, fisiológica, psíquica, económica, cultural o social". Asimismo, el Considerando 26 de esta Directiva se refiere a esta cuestión señalando que, para determinar si una persona es identificable, hay que considerar el conjunto de los medios que puedan ser razonablemente utilizados por el responsable del tratamiento o por cualquier otra persona para identificar a aquélla.

La Exposición de Motivos de la Instrucción 1/2006, de 8 de noviembre, de esta Agencia Española de Protección de Datos, relativa al tratamiento de los datos con fines de videovigilancia señala que: *"La seguridad y la vigilancia, elementos presentes en la sociedad actual, no son incompatibles con el derecho fundamental a la protección de la imagen como dato personal, lo que en consecuencia exige respetar la normativa existente en materia de protección de datos, para de esta manera mantener la confianza de la ciudadanía en el sistema democrático".* Sigue señalando: *"Las imágenes se consideran un dato de carácter personal, en virtud de lo establecido en el artículo 3 de la Ley Orgánica 15/1999..."*.

La garantía del derecho a la protección de datos, conferida por la normativa de referencia, requiere que exista una actuación que constituya un tratamiento de datos personales en el sentido expresado. En otro caso las mencionadas disposiciones no serán de aplicación.

Por su parte, la citada Instrucción 1/2006, dispone en su artículo 1.1 lo siguiente:

"1. La presente Instrucción se aplica al tratamiento de datos personales de imágenes de personas físicas identificadas o identificables, con fines de vigilancia a través de sistemas de cámaras y videocámaras.

El tratamiento objeto de esta Instrucción comprende la grabación, captación, transmisión, conservación, y almacenamiento de imágenes, incluida su reproducción o emisión en tiempo real, así como el tratamiento que resulte de los datos personales relacionados con aquéllas.

Se considerará identificable una persona cuando su identidad pueda determinarse mediante los tratamientos a los que se refiere la presente instrucción, sin que ello requiera plazos o actividades desproporcionados.

Las referencias contenidas en esta Instrucción a videocámaras y cámaras se entenderán hechas también a cualquier medio técnico análogo y, en general, a cualquier sistema que permita los tratamientos previstos en la misma."

La Instrucción 1/2006 en su artículo 2 establece lo siguiente:

"1. Sólo será posible el tratamiento de los datos objeto de la presente instrucción, cuando se encuentre amparado por lo dispuesto en el artículo 6.1 y 2 y el artículo 11.1 y 2 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

2. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior la instalación de cámaras y videocámaras deberá respetar en todo caso los requisitos exigidos por la legislación vigente en la materia.”

De lo anteriormente expuesto se desprende que el concepto de dato personal, según la definición de la LOPD, requiere la concurrencia de un doble elemento: por una parte, la existencia de una información o dato y, por otra, que dicho dato pueda vincularse a una persona física identificada o identificable, por lo que la imagen de una persona física identificada o identificable constituye un dato de carácter personal.

De acuerdo con los preceptos transcritos, la cámara reproduce la imagen de los afectados por este tipo de tratamientos y, a efectos de la LOPD, la imagen de una persona constituye un dato de carácter personal, toda vez que la información que capta concierne a personas que las hacen identificadas o identificables y suministra información sobre la imagen personal de éstas, el lugar de su captación y la actividad desarrollada por el individuo al que la imagen se refiere.

III

En el presente expediente la **POLICÍA LOCAL DE SANT FRUITOS DE BAGES (BARCELONA)**, denuncia la existencia de una cámara de videovigilancia en el portal sito en la (C/....1) de la localidad de *****LOCALIDAD.1 (BARCELONA)**, cuyo titular era **D. A.A.A.**, sin autorización de los vecinos.

Ante dicha denuncia en fecha 18 de septiembre de 2015 se solicita información al denunciado por los Servicios de Inspección de esta Agencia, siendo devuelta la carta por el servicio de Correos con la indicación “Ausente reparto”.

En fecha 20 de octubre de 2015 se reitera la solicitud de información al denunciado siendo devuelta la carta con la indicación de “Desconocido”.

En fecha 3 de noviembre de 2015 se realiza solicitud de colaboración a la Policía Local de Sant Fruitos de Bages, para que realicen determinadas actuaciones oportunas encaminadas a determinar diversos aspectos del sistema de videovigilancia denunciado, elaborando informe al respecto de fecha 12 de noviembre de 2015 en el que se pone de manifiesto que a fecha 10 de noviembre de 2015 se ha comprobado la existencia de la cámara denunciada a la entrada de la portería o edificio, siendo esta una zona ajena a la vivienda del denunciado. Que después de realizar las gestiones oportunas para proceder a la identificación del morador actual de la vivienda, esa Policía ha podido comprobar que el antiguo morador era el señor **A.A.A.**, si bien éste ha llevado a cabo la venta del inmueble y que el actual propietario sería **“CAPULATELL PROMOCIONS, SOCIEDAD LIMITADA”**, domiciliada en *****LOCALIDAD.2 (***CP.1-LLEIDA, (C/....1)**.

Por lo tanto, a la fecha de noviembre de 2015, **D. A.A.A.**,(denunciado)había procedido a la venta del inmueble a **“CAPULATELL PROMOCIONS, SOCIEDAD LIMITADA”**.

Debe tenerse en cuenta, que para que pueda afirmarse la responsabilidad es imprescindible que pueda imputarse al hecho constitutivo de infracción a una persona (principio de personalidad), así como que su conducta pueda ser calificada de culpable (principio de culpabilidad).

El principio de personalidad de la sanción ha sido consagrado por el Tribunal Constitucional en la STC 219/1988, como principio de responsabilidad por hechos

propios. El respeto al principio de personalidad exige un nexo casual entre el hecho constitutivo de la infracción y la persona responsable. Ahora bien, en el ámbito que nos ocupa, ello no implica necesariamente que tal vínculo sólo pueda trazarse con el autor material de los hechos, ni tampoco que tal autor material deba en todo caso ser considerado responsable. Y ello no entra en colisión con la prohibición derivada del principio de personalidad, de responder por actos ajenos, sino de lo contrario.

La cuestión radica en analizar la especial configuración que el hecho infractor tiene en Derecho Administrativo Sancionador. La tipificación de las infracciones administrativas trata en definitiva, por lo general, de proteger el cumplimiento del Ordenamiento Jurídico, y de sancionar, por tanto, su incumplimiento, a diferencia de lo que ocurre con las infracciones penales, que sancionan la lesión o puesta en peligro de un bien jurídico protegido, sin que haya, por lo general una norma sustantiva subyacente que imponga la obligación que haya sido vulnerada.

En consecuencia, el hecho infractor consiste en un incumplimiento de la norma (y no es una lesión aun bien jurídico), sólo el titular de tal obligación estará, en principio capacitado para cometer la infracción. La exigencia de responsabilidad a quien no sea titular de la obligación incumplida vulneraría, por tanto, el principio de personalidad, pues no corresponde al no titular cumplir la obligación, ni por ende, se le puede hacer responder de su incumplimiento. Ello explica que, a efectos de determinar la imputación de una infracción a una persona determinada, lo relevante sea la indagación previa de la titularidad de la obligación que subyace al tipo.

Del mismo modo, la culpabilidad en Derecho Administrativo Sancionador no es el fundamento de la sanción, sino un requisito para exigir responsabilidad por el ilícito cometido.

Así, en el caso que nos ocupa, el denunciado en el procedimiento ha procedido a la venta del inmueble donde se encuentra actualmente instalada una cámara de videovigilancia, existiendo un nuevo titular del mismo, por lo que no cabe imputar una infracción administrativa cuando no se haya obtenido y acreditado una prueba de cargo acreditativa de los hechos que motivan esta imputación o de la intervención en los mismos del presunto infractor, procediendo el archivo del presente expediente de actuaciones previas respecto a D. **A.A.A.**.

No obstante, se procede a la apertura de un nuevo expediente de actuaciones previas dirigido al nuevo titular del sistema de videovigilancia, a los efectos de verificar si el mismo cumple con la normativa de protección de datos.

Por lo tanto, de acuerdo con lo señalado,

Por la Directora de la Agencia Española de Protección de Datos,

SE ACUERDA:

1. **PROCEDER AL ARCHIVO** de las presentes actuaciones.
2. **NOTIFICAR** la presente Resolución a D. **A.A.A.** y al **AYUNTAMIENTO DE SANT FRUITOS DE BAGES**.

De conformidad con lo establecido en el apartado 2 del artículo 37 de la LOPD, en la redacción dada por el artículo 82 de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, la presente Resolución se hará pública, una vez haya sido notificada a los interesados. La publicación se realizará conforme a lo previsto en la Instrucción 1/2004, de 22 de diciembre, de la Agencia

Española de Protección de Datos sobre publicación de sus Resoluciones y con arreglo a lo dispuesto en el artículo 116 del Real Decreto 1720/2007, de 21 diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la LOPD.

Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa (artículo 48.2 de la LOPD), y de conformidad con lo establecido en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los interesados podrán interponer, potestativamente, recurso de reposición ante la Directora de la Agencia Española de Protección de Datos en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la notificación de esta resolución, o, directamente recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 25 y en el apartado 5 de la disposición adicional cuarta de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la notificación de este acto, según lo previsto en el artículo 46.1 del referido texto legal.

Sin embargo, el responsable del fichero de titularidad pública, de acuerdo con el artículo 44.1 de la citada LJCA, sólo podrá interponer directamente recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional con arreglo a lo dispuesto en el artículo 25 y en el apartado 5 de la disposición adicional cuarta de la LJCA, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la notificación de este acto, según lo previsto en el artículo 46.1 del referido texto legal.

Mar España Martí
Directora de la Agencia Española de Protección de Datos